



# Asamblea General

Quincuagésimo cuarto período de sesiones

Documentos Oficiales

Distr. general  
17 de mayo de 2000  
Español  
Original: inglés

---

## Sexta Comisión

### Acta resumida de la 23ª sesión

Celebrada en la Sede, Nueva York, el martes 2 de noviembre de 1999 a las 10.00 horas

*Presidente:* Sr. Mochochoko . . . . . (Lesotho)

## Sumario

Tema 155 del programa: Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 51º período de sesiones (*continuación*)

---

La presente acta está sujeta a correcciones. Dichas correcciones deberán enviarse, con la firma de un miembro de la delegación interesada, y *dentro del plazo de una semana a contar de la fecha de publicación*, a la Jefa de la Sección de Edición de Documentos Oficiales, oficina DC2-750, 2 United Nations Plaza, e incorporarse en un ejemplar del acta.

Las correcciones se publicarán después de la clausura del período de sesiones, en un documento separado para cada Comisión.

*Se declara abierta la sesión a las 10.15 horas.*

**Tema 155 del programa: Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 51º período de sesiones (continuación)** (A/54/10 y Corr.1 y 2)

1. El Sr. Hilger (Alemania) acoge con agrado la aprobación provisional, por el Comité de Redacción, de un conjunto de proyectos de artículos sobre responsabilidad de los Estados (A/54/10, párrs. 49 a 453). En el capítulo III de la primera parte del texto, la sustitución de los 11 artículos anteriores por cinco nuevos proyectos de artículos ha sido positiva, ya que el capítulo III anterior parecía estar sobrecargado de normas. La reformulación del proyecto de artículo 16, la nueva disposición esencial del capítulo, constituye una mejora importante, pues abarca el contenido del párrafo 1 del artículo 17 anterior y el párrafo 1 del artículo 19, que por lo tanto pueden suprimirse sin que se pierda ningún elemento de fondo. Lo mismo se aplica a los artículos 20, 21 y 23 del proyecto de 1996. La delegación de Alemania también está de acuerdo con los cambios introducidos al proyecto de artículo 18, en que se establece un principio general sobre el aspecto temporal en relación con las violaciones del derecho internacional. En los artículos 24 y 25 del proyecto deberían incluirse las normas especiales para los hechos continuos y compuestos.

2. Con respecto al artículo 25, la definición de hechos compuestos y complejos plantea la cuestión de si la Comisión debe apoyar el uso de un concepto más limitado únicamente en el caso de los primeros. El Gobierno de Alemania aún no ha tomado una decisión definitiva sobre la cuestión. La decisión de la Corte Internacional de Justicia en el asunto relativo al Proyecto *Gabcikovo-Nagymaros* tendrá, naturalmente, repercusiones importantes en el debate sobre los hechos compuestos.

3. Con respecto al capítulo IV del proyecto de artículos, el orador acoge con satisfacción la inclusión de criterios precisos con respecto a las circunstancias en que un Estado que ayuda a otro en la comisión de un hecho internacionalmente ilícito es responsable en el plano internacional. La cláusula de salvedad, el artículo 28 bis del proyecto, debería abarcar todos los casos previstos en el capítulo IV. Las disposiciones del capítulo no deben excluir ningún otro fundamento para

atribuir responsabilidad a un Estado que presta asistencia, dirige y controla o coacciona a otro Estado.

4. El examen del capítulo V del proyecto fue el que planteó más dificultades durante el período de sesiones más reciente de la Comisión, porque como había sido aprobado provisionalmente en primera lectura, ha sido mencionado ampliamente en decisiones judiciales y en doctrina. Por lo tanto, la introducción de nuevos cambios debe examinarse con especial prudencia. Alemania no está convencida de que deba suprimirse el artículo 29 del proyecto, aun después de haber escuchado el argumento de que el consentimiento de otro Estado no excluye la ilicitud. En el texto debería incluirse una disposición sobre el consentimiento.

5. Alemania también tiene interés en otros dos aspectos relacionados con la exclusión de la ilicitud: el *jus cogens* y la legítima defensa. Además, acogería favorablemente la formulación de un artículo en que se reconociera la primacía de las normas imperativas así como la continuación del debate sobre la cuestión. El orador considera conveniente incluir un segundo párrafo en el artículo 29 ter, propuesto por el Relator Especial, relativo a la legítima defensa y a las obligaciones que limitan a los Estados. El problema fue tratado por la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva sobre la *ilicitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares*. Sería preferible formular un párrafo explícito a explicar los detalles en el comentario.

6. El artículo 31 del proyecto es otra disposición importante del capítulo V. No existe ninguna norma general de derecho internacional que establezca que el Estado deba tener conciencia de que su comportamiento no está en conformidad con una obligación. Por lo tanto, Alemania está de acuerdo con la propuesta de que se suprima el requisito subjetivo de percatarse de la ilicitud. Sin embargo, la supresión de otros aspectos de la disposición sólo será aceptable si en el comentario se establece de manera suficientemente clara que la fuerza mayor debe ser realmente ajena al control del Estado que la aduce y que no se aplica a situaciones en que el Estado haya provocado la fuerza mayor, ya sea directamente o por negligencia.

7. La disposición del artículo 33 del proyecto, relativa al estado de necesidad es problemática y plantea dificultades. El estado de necesidad como causa de exclusión de la ilicitud debe poder invocarse solamente en casos extremos. Por lo tanto, el proyecto de artículo debería formularse en términos negativos. Con respecto

a la cuestión de si el problema de la intervención humanitaria debe examinarse en el marco del concepto del estado de necesidad definido en el proyecto de artículo, la Comisión quizás actúa con prudencia al decidir que la cuestión se resolviera a la luz de los acontecimientos que ocurrieran en el marco del sistema de las Naciones Unidas.

8. El **Sr. Sepúlveda** (México) expresa su deseo de que los avances logrados con respecto al proyecto de artículos sobre responsabilidad de los Estados conduzcan a su aprobación en segunda lectura. Se han introducido cambios importantes en el contenido y la estructura del proyecto de artículos, algunos de los cuales han sido necesarios en aras de la claridad, mientras que otros se han introducido con el propósito de facilitar la aceptación más amplia posible. Sin embargo, es necesario mantener un equilibrio, ya que una simplificación excesiva podría debilitar los efectos de la labor de la Comisión.

9. El segundo informe del Relator Especial sobre la responsabilidad de los Estados (A/CN.4/498 y Add.1 y 2) contiene modificaciones de fondo al texto del proyecto aprobado en primera lectura en 1996. Por lo tanto, aún no es posible tener una perspectiva de conjunto del proyecto de artículos ni pronunciarse sobre el contenido de cada una de las disposiciones, ya que su alcance aún no ha sido determinado. Por ejemplo, cabe preguntar cómo puede juzgarse la legitimidad de las contramedidas si no se conoce todavía el sistema de arreglo de controversias en relación con la responsabilidad de los Estados, o si ese sistema tendrá validez aun en el caso de que el proyecto de artículos no adopte la forma de una convención.

10. El artículo 16 es fundamental y por ello su inclusión en el proyecto es necesaria. El origen de la obligación, sea ésta consuetudinaria, convencional o de otra índole, carece de relevancia a los efectos de la responsabilidad; por lo tanto, no conviene crear un régimen que vincule la existencia de la responsabilidad con el origen de la norma violada, aunque dicho origen sí influya en las consecuencias específicas de la responsabilidad. Todavía más importante es el hecho de que, aún cuando el origen de la obligación no sea un factor determinante, la magnitud de la responsabilidad, que influye en los aspectos de la reparación o la compensación, depende del tipo de norma transgredida. La violación de una norma imperativa, como la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, tiene un carácter, un alcance y consecuencias más graves

que la transgresión de una norma contractual entre dos Estados.

11. Debería prestarse más atención a la cuestión fundamental de la relación entre la ilicitud y la responsabilidad, que es importante para establecer la vinculación entre los capítulos III y IV. En muchos casos, un Estado que viola una obligación internacional puede quedar excluido de responsabilidad si existen circunstancias atenuantes, pero esa violación sigue siendo un acto ilícito. La sugerencia del Relator Especial de reunir en un solo texto los conceptos que figuran en el artículo 16, en el párrafo 1 del artículo 17 y en el párrafo 1 del artículo 19, podría contribuir a resolver algunas de las confusiones que han surgido, por lo que merece ser examinada con detenimiento.

12. Con respecto al artículo 18 del proyecto, uno de los elementos básicos de la existencia de responsabilidad internacional es que la obligación violada se encuentre vigente para el Estado transgresor. Como el principio de la intertemporalidad se aplica igualmente a todas las obligaciones internacionales, no deben existir excepciones al párrafo 1 del artículo 18. Es importante que ese principio quede claramente reflejado en el proyecto, sobre la base de los modos de interpretación reconocidos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. México apoya también la sugerencia del Relator Especial de que se establezca en un nuevo artículo el principio según el cual la responsabilidad del Estado, una vez que se origina, no se extingue simplemente porque la obligación subyacente haya desaparecido.

13. Con respecto al artículo 20 propuesto, México considera conveniente por el momento, mantener la distinción entre las obligaciones de comportamiento y las obligaciones de resultado, ya que permite determinar cuándo ocurre la infracción y cuándo se completa. Sin embargo, su supresión no afectaría de manera sustantiva el conjunto de normas sobre la responsabilidad de los Estados, aunque convendría conservar la distinción en caso de que fuera de utilidad en otros capítulos.

14. Ha sido útil fortalecer el artículo 26 bis del proyecto, disposición de procedimiento que en realidad constituye una disposición sustantiva en que se define el momento a partir del cual puede exigirse la responsabilidad de un Estado. La inobservancia de esta disposición afecta la existencia misma de la responsabilidad, ya que el agotamiento de un recurso interno puede determinar si existe o no responsabilidad internacional al

dar al Estado la oportunidad de corregir una conducta ilícita.

15. Con respecto al capítulo IV del proyecto de artículos, México comparte la opinión del Relator Especial de que el carácter de la responsabilidad de un Estado por los hechos de otro Estado debe examinarse desde una amplia perspectiva que tenga en cuenta las obligaciones de *jus cogens* y *erga omnes*. Existe responsabilidad únicamente cuando la conducta de un Estado implica violación de una norma internacional que le imponga el deber de actuar de una determinada forma. Desde luego, es válida la idea de que un Estado puede tener responsabilidad por el hecho ilícito de otro Estado cuando le presta asistencia, lo dirige o lo controla en la comisión de un hecho internacionalmente ilícito o lo coacciona para que lo cometa. Sin embargo, esa responsabilidad estará en función de las obligaciones que el derecho internacional impone al Estado que impulsa o coacciona al otro Estado.

16. La propuesta de eliminar el proyecto de artículo 29, relativo al consentimiento, debe considerarse con prudencia. El consentimiento prestado con anterioridad a la comisión del hecho crea circunstancias que excluyen la ilicitud. De ahí la necesidad de establecer una reglamentación al respecto. Sin embargo, es necesario analizar la cuestión con más detenimiento. La supresión de esa disposición no simplifica el proyecto de artículos ni evita la necesidad de precisar las condiciones en las cuales el consentimiento excluye la ilicitud. Por lo tanto, el artículo debe redactarse nuevamente teniendo esto en cuenta.

17. Con respecto al proyecto de artículos 29 bis, relativo al cumplimiento de una norma imperativa, son muy limitadas las circunstancias en que la disposición puede ser invocada en la práctica, por lo que su inclusión en el proyecto de artículos es cuestionable y quizás innecesaria.

18. El texto del artículo 29 ter del proyecto, propuesto por el Relator Especial, genera una serie de dudas. Toda disposición relativa a la legítima defensa que se incluya en el proyecto de artículos debe ajustarse a las normas previstas en la Carta de las Naciones Unidas. El párrafo 2 de ese artículo también plantea dificultades ya que impone limitaciones a un derecho inmanente.

19. Convendría mantener entre corchetes los artículos 30 y 30 bis hasta que se definiera el régimen de contramedidas en el capítulo III de la segunda parte del

proyecto. Si se conserva la última disposición, será necesario fortalecer el vínculo de causalidad entre el incumplimiento anterior y el incumplimiento como consecuencia de aquél. Además, debería hacerse alguna referencia a la proporcionalidad.

20. La inclusión del artículo 33 podría complicar innecesariamente el proyecto de artículos. El concepto de estado de necesidad debería incluirse en el proyecto de artículos, pero bajo condiciones bien definidas y con limitaciones estrictas. El texto del proyecto no es el lugar apropiado para incluir conceptos que no tienen arraigo en el derecho internacional, como el de la intervención humanitaria. Las disposiciones relativas al uso de la fuerza contenidas en la Carta de las Naciones Unidas son normas imperativas, por lo que no puede invocarse el estado de necesidad para justificar su transgresión.

21. Con respecto al tema de la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional, el orador formula algunas observaciones en relación con los párrafos 604 a 608 del informe de la Comisión (A/54/10). Las divergencias que existen en el seno de la Comisión respecto de la forma de abordar el tema han llevado a algunos de sus miembros a cuestionar la necesidad de seguir adelante con los trabajos, por lo que la labor de la Comisión ha quedado empantanada debido a cuestiones de procedimiento. Las cuestiones relativas a la prevención de actividades peligrosas, si bien son útiles, no constituyen la parte principal del mandato de la Comisión; las deliberaciones sobre la responsabilidad propiamente dicha no proporcionan a la Sexta Comisión elementos suficientes que le permitan adoptar decisiones concretas sobre ese aspecto del tema.

22. En virtud del derecho internacional, los Estados deben asegurarse de que las actividades que realizan no causen daños transfronterizos. El principio 22 de la Declaración de Estocolmo señala claramente que los Estados deben cooperar para desarrollar el derecho internacional sobre la responsabilidad y la indemnización de las víctimas de contaminación u otro daño ambiental causado por actividades realizadas bajo su jurisdicción o control en zonas situadas más allá de sus fronteras. Por lo tanto, resulta clara la necesidad de crear un régimen de responsabilidad mucho más coherente y completo que el que existe actualmente en el derecho internacional. La práctica de los Estados respecto de actividades peligrosas demuestra que el concepto de responsabilidad por daños transfronterizos se afianza

cada vez más. Por ello, resulta difícil comprender la renuencia de la Comisión a ocuparse del tema.

23. Es particularmente lamentable que, a pesar de los llamamientos formulados al respecto, la Comisión haya decidido suspender el examen de la responsabilidad hasta que se apruebe en segunda lectura el proyecto de artículos, en que se prevé el régimen de prevención. La delegación de México apoyará esa decisión con reservas; hubiese preferido que continuara el análisis de la cuestión teniendo en cuenta los trabajos de los relatores especiales anteriores. La necesidad de continuar con el estudio del tema de la responsabilidad, así como el hecho de que la suspensión de la labor no prejuzga los resultados, deberán recogerse en la resolución que apruebe la Asamblea General en relación con el informe de la Comisión.

24. Si bien la protección del medio ambiente es una cuestión amplia y compleja, la solicitud formulada por la Comisión de que se estudien cuestiones concretas en la materia (A/54/10, párr. 33) ha suscitado el interés de la delegación de México. La Comisión debe realizar un estudio preliminar de cuestiones ambientales concretas para ayudar a los Estados a decidir si es necesario continuar el proceso de codificación y desarrollo en esa esfera. Posteriormente podrían efectuarse estudios a fondo, basados en la práctica de los Estados, sobre el principio “el que contamina paga”, y sobre las obligaciones *erga omnes* en materia ambiental, entre otros asuntos. En sus futuros períodos de sesiones, la Comisión podría presentar a los Estados estudios de viabilidad concretos que permitieran determinar las cuestiones que habrán de abordarse, el método que habrá de utilizarse y los resultados previstos.

25. Con respecto a la celebración de períodos de sesiones divididos (párrs. 633 a 639), México considera que la Comisión se beneficiaría del diálogo y de la interacción con la Sexta Comisión en Nueva York. Sin embargo, por el momento sería prematuro tomar decisiones sobre la división permanente de los períodos de sesiones en vista de las consecuencias financieras y los inconvenientes prácticos que suponen los traslados entre Nueva York y Ginebra. Por lo tanto, el criterio rector para adoptar cualquier decisión debe ser el de una mayor productividad y quizás la reorganización del programa de trabajo de la Comisión.

26. La **Sra. Hallum** (Nueva Zelanda) dice que la codificación de la responsabilidad de los Estados está estrechamente relacionada con los propósitos y principios

de la Carta de las Naciones Unidas. Como la Comisión ha iniciado la etapa final de su labor, es esencial mantener el impulso que ha generado la elaboración de una serie de proyectos de artículos que tienen una amplia aplicación y gran importancia. Por ello insta a los Estados a que presten asistencia a la Comisión para que concluya su labor sobre el tema antes del año 2002.

27. Una de las cuestiones difíciles que quedan por resolver es la forma que podría adoptar el proyecto de artículos. Otros aspectos aún más fundamentales que deben examinarse son: la distinción entre la responsabilidad de los Estados respecto de crímenes y de delitos; el problema de las obligaciones internacionales contrapuestas; la conveniencia de establecer una clasificación de las obligaciones y las violaciones; el establecimiento de un régimen satisfactorio para atribuir a los Estados responsabilidad por hechos internacionalmente ilícitos; el alcance y el contenido del capítulo del proyecto de artículos relativo a las circunstancias que excluyen la ilicitud y la medida en que los artículos de ese capítulo tratan más de normas primarias que de normas secundarias; la aplicación de contramedidas por un Estado lesionado; y la cuestión de la solución de controversias.

28. La relación entre los diversos capítulos del proyecto de artículos aún no se ha formulado satisfactoriamente. La relación entre los capítulos II y III se describe claramente en el artículo 3 del proyecto. Sin embargo, no resulta muy claro el lugar que corresponde a los capítulos IV y V, aunque podrían quedar comprendidos en la segunda parte del artículo 3, relativo a la violación de una obligación internacional. Nueva Zelanda apoya la simplificación del capítulo III, siempre que se mantengan su claridad y su carácter global; sin embargo, el proyecto no debería simplificarse demasiado.

29. La distinción que se establece entre las obligaciones de resultado, las obligaciones de comportamiento y las obligaciones de prevención es valiosa desde el punto de vista analítico. Nueva Zelanda apoyará cualquier enfoque pragmático que mantenga esa distinción en el proyecto de artículos y en el comentario. Los artículos 24 y 25 del proyecto, relativos a los hechos ilícitos consumados y los hechos ilícitos continuados deben simplificarse, pero la distinción debe mantenerse, puesto que los hechos ilícitos consumados son distintos desde el punto de vista cualitativo de los hechos ilícitos continuados y pueden entrañar consecuencias distintas.

30. Podría considerarse que el capítulo IV abarca también la injerencia en los derechos contractuales; sin embargo, el régimen creado debe tener aceptación universal y no debe invadir indebidamente el ámbito de las normas primarias. Nueva Zelanda considera también que la inclusión de un artículo 34 *bis*, en que se establece un procedimiento para hacer valer una circunstancia que excluya la ilicitud, puede ser de utilidad para el proyecto de artículos.

31. El **Sr. Rao** (India) dice que, para concluir la elaboración del proyecto de artículos sobre responsabilidad de los Estados y lograr su aprobación en segunda lectura antes del año 2001, la Comisión debería mantener los principios bien establecidos que se enuncian en el proyecto de artículos y hacer muy pocos cambios estructurales y de redacción; sacrificar el desarrollo progresivo en todos los casos en que sea posible; eliminar los conceptos respecto de los cuales no haya consenso o que sean polémicos; y establecer una relación clara entre las distintas partes del proyecto de artículos, elaboradas en diferentes momentos y por distintos relatores especiales. El orador recomienda que se actúe con flexibilidad respecto de la forma definitiva que ha de adoptar el proyecto de artículos, integrado por normas secundarias que no deben afectar a las normas primarias ni a las obligaciones que figuran en los convenios internacionales o se derivan del derecho internacional consuetudinario. Esencialmente, el proyecto de artículos no se aplicaría a los regímenes jurídicos autónomos elaborados en los últimos años, como los relativos al medio ambiente, los derechos humanos y el comercio internacional.

32. La comunidad internacional no cuenta con métodos o foros satisfactorios y generalmente aceptados para determinar la ilicitud de un comportamiento. Además, las normas primarias sobre la no utilización de la fuerza, la legítima defensa o las obligaciones *jus cogens* o *erga omnes*, el derecho internacional humanitario o incluso los derechos humanos no se prestan con facilidad a una interpretación y aplicación a nivel universal. La responsabilidad puede variar según las condiciones y circunstancias de las distintas partes del mundo. Por lo tanto, es indispensable establecer una responsabilidad diferenciada. Como las normas sobre la responsabilidad de los Estados no ser más claras que las normas primarias ni ser más rigurosas que las obligaciones primarias, una formulación excesivamente detallada del concepto de responsabilidad de los Estados en el proyecto de artículos sería contraproducente.

33. Es de esperar que la serie de artículos de la primera parte del proyecto esté disponible, con sus respectivos comentarios, el año siguiente. La Comisión debería simplificar el contenido y la presentación del proyecto de artículos y, quizás, examinar por separado el importante concepto de los crímenes internacionales. La delegación de la India solicita que se aclaren y se simplifiquen los conceptos siguientes: “hechos complejos”, “casos fortuitos”, “obligaciones de comportamiento” y “obligaciones de resultado” en relación con el concepto de “obligaciones de prevención”. Como hipótesis de trabajo, convendría mantener la distinción entre las obligaciones de comportamiento y las obligaciones de resultado. El concepto de ilicitud también debería examinarse separadamente de las circunstancias que excluyen la ilicitud, incluidos el consentimiento, la fuerza mayor, el caso de peligro extremo, el estado de necesidad y la legítima defensa; esos factores deben exonerar al Estado de las consecuencias del comportamiento ilícito pero no de la atribución de responsabilidad en sí. Como a menudo resulta prácticamente imposible establecer la distinción entre esos conceptos, convendría formularlos conjuntamente a fin de evitar confusiones. El concepto de legítima defensa que excluye las consecuencias de la ilicitud es distinto del concepto de legítima defensa que se describe en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Además, la función del consentimiento como circunstancia que excluye las consecuencias es ambiguo, especialmente en los casos en que la infracción de una obligación internacional preocupa a otros Estados además del Estado que ha resultado directamente lesionado y que quizás haya dado su consentimiento.

34. La India no está convencida de que las normas sobre la responsabilidad de los Estados deban ocuparse del concepto tan complicado y en gran medida mal utilizado de las contramedidas, cuya aplicación en sí es incorrecta. Además, se reserva su opinión con respecto a la necesidad de considerar que las contramedidas sean una circunstancia que excluye la ilicitud con arreglo al capítulo V de la primera parte. El tema no debe seguir tratándose en relación con la segunda parte.

35. Con respecto a las cuestiones planteadas en el párrafo 29 del informe de la Comisión, debe establecerse una distinción entre los Estados directamente lesionados y los Estados que sólo tienen un interés jurídico en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de tratados o del derecho internacional

consuetudinario. La intervención por parte de la segunda categoría de Estados en cualquier situación de comportamiento ilícito debe regirse adecuadamente por los límites del *locus standi*; sólo el Estado que haya sufrido realmente daños materiales debe tener derecho a reclamar una indemnización. La India se reserva su opinión con respecto a la conveniencia que en el proyecto se incluya el complicado concepto de las diferentes lesiones de los Estados. En general, el pago de intereses sobre las indemnizaciones pendientes de pago debe determinarse después de que se haya fijado el monto de la indemnización y haya transcurrido un período de gracia suficiente para su pago.

36. El **Sr. Baena Soares** (Brasil) recalca la necesidad de que se logren avances en la elaboración de un proyecto de convención sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, asunto urgente que se sigue postergando. La erosión de la práctica *par imparum non habet iudicium* es casi universal; sin embargo, debe examinarse la necesidad de crear un texto vinculante que permita superar las diferencias en el tratamiento de la cuestión por los distintos Estados.

37. En toda convención internacional sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes se debe tener en cuenta la rápida evolución de la situación actual. En el Brasil, por ejemplo, el Supremo Tribunal Federal determinó que la norma consuetudinaria de la inmunidad absoluta ya no tenía vigencia, en las demandas laborales, en casos frecuentes de alegaciones de inmunidad de jurisdicción por la parte demandada. Los aspectos polémicos del proyecto de convención deberían negociarse en el Grupo de Trabajo de composición abierta de la Sexta Comisión que examinará las cuestiones sustantivas pendientes. El Grupo de Trabajo deberá centrarse en los cinco temas sustantivos subrayados por el Presidente de la Comisión de Derecho Internacional y no debería reabrir el debate de las cuestiones respecto de las cuales se haya logrado un consenso.

38. Es aceptable la sugerencia del Grupo de Trabajo de que se reformule el apartado b) del párrafo 1 del artículo 2 relativo al concepto de Estado a los efectos de la inmunidad, aunque hubiese sido preferible suprimir los corchetes. Con respecto a la determinación del carácter comercial de un contrato o una transacción el Brasil considera que el carácter del hecho debe mantenerse como criterio. Con respecto a la cuestión planteada en relación con el artículo 10 el orador apoya la sugerencia de que se hagan aclaraciones en el párrafo 3

y se indique que la inmunidad de un Estado no es aplicable a las reclamaciones de responsabilidad civil relacionadas con transacciones mercantiles realizadas por una empresa estatal u otra entidad establecida por el Estado, como lo sugiere el Grupo de Trabajo. La cuestión de los contratos de trabajo debe examinarse con más detenimiento, aunque el Brasil acepta las excepciones propuestas por el Grupo de Trabajo con respecto al principio general del artículo 11.

39. Con respecto a las medidas coercitivas contra los bienes de un Estado el Brasil está de acuerdo con la distinción hecha por el Grupo de Trabajo y espera que de sus debates surjan nuevos elementos que permitan optar por una de las tres variantes propuestas (A/54/10, anexo, párr. 129).

40. El orador espera que antes del año 2001 se termine de elaborar y se apruebe en segunda lectura el proyecto de artículos sobre responsabilidad de los Estados; además, apoya las propuestas formuladas por el representante de la India al respecto. La ingente labor que realiza la Comisión sobre el tema debe culminar necesariamente en una convención que sea clara y pueda aplicarse en la práctica. Con respecto a la cuestión fundamental de la definición de Estado lesionado, el Brasil apoya la distinción que se hace entre el Estado o los Estados específicamente lesionados por un hecho internacionalmente ilícito y otros Estados que tienen un interés jurídico en el cumplimiento de las obligaciones pertinentes. Cabe esperar que la cuestión de las contramedidas sea objeto de un examen detenido que permita definir sus límites y el carácter excepcional de su aplicación.

41. El **Sr. Blumenthal** (Australia), hablando sobre la responsabilidad de los Estados, manifiesta algunas inquietudes con respecto a la definición de "Estado lesionado" en el contexto de los tratados multilaterales. Al parecer, el inciso iii) del apartado e) del párrafo 2 del artículo 40 del proyecto de artículos sobre el tema permite que cualquier Estado parte en un tratado multilateral para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales sea considerado Estado lesionado y pueda, por lo tanto, reclamar una reparación. Si bien Australia reconoce el carácter especial de los tratados sobre derechos humanos, se pregunta en qué puede consistir la reparación a otros Estados partes cuando un Estado parte en un tratado sobre derechos humanos viola los derechos de sus propios ciudadanos incumpliendo sus obligaciones internacionales y cómo puede evaluarse la reparación si los demás Estados

partes no resultan realmente lesionados. Si la reparación en esos casos no se limita a las seguridades y garantías de no repetición, la disposición podría alentar a los Estados a recurrir a las otras formas de reparación que se enumeran en el artículo 42.

42. En la referencia que se hace en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 40 a los tratados para la protección de los intereses colectivos de los Estados partes en ellos, debería aclararse el tipo de tratados multilaterales de que se trata; además la referencia plantea las mismas dudas con respecto a la reparación. Por último, según lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 40, si un hecho internacionalmente ilícito constituye un crimen internacional, la definición de Estado lesionado abarca a todos los Estados, no sólo a aquellos cuyos derechos han sido violados por el hecho ilícito. El orador duda que sea sensato o incluso viable permitir que todos los Estados puedan exigir reparación por los daños que cause un Estado a los seres humanos bajo su jurisdicción.

43. En el derecho internacional se ha establecido desde hace mucho tiempo que la reparación íntegra no admite condiciones. El orador no tiene conocimiento de que exista una práctica de los Estados, una norma internacional o una decisión jurídica que pueda respaldar la excepción que se establece en el párrafo 3 del artículo 42, según la cual no se concederá la reparación del daño si ésta implica privar a la población de un Estado de sus propios medios de subsistencia. Los Estados podrían abusar de esa excepción para evitar el cumplimiento de sus obligaciones jurídicas. Australia tampoco puede estar de acuerdo con la excepción que se establece en el párrafo d) del artículo 43, según la cual la reparación podría comprometer gravemente la independencia política o la estabilidad económica del Estado que cometió el hecho internacionalmente ilícito.

44. En el párrafo 2 del artículo 44 las palabras “podrá incluir los intereses” deben sustituirse por “incluirá los intereses” para no alentar al Estado que cometió el hecho ilícito a que aplaze el pago de la indemnización. El pago obligatorio de intereses coincide con las opiniones de los tribunales internacionales que han examinado la cuestión.

45. En el artículo 45 convendría definir la expresión “daño moral” que figura en el párrafo 1. El apartado c) del párrafo 2 se refiere a la indemnización punitiva, práctica que no se reconoce en todas las jurisdicciones. La disposición del apartado d) del párrafo 2, relativa a

las medidas disciplinarias contra funcionarios es una cuestión de carácter interno que no debe incluirse en el proyecto de artículos. Habida cuenta de las diferencias culturales, la disposición del párrafo 3, que limita la satisfacción prevista a las demandas que no menoscaben la dignidad del Estado que ha cometido el hecho ilícito, es arbitraria y debe suprimirse.

46. La labor de la Comisión en relación con el capítulo III, relativo a las contramedidas, constituye un valioso resumen de la práctica de los Estados y mantiene un equilibrio justo y adecuado entre los intereses del Estado lesionado y los del Estado que comete el hecho ilícito. Sin embargo, el que se recurra a mecanismos de solución de controversias no debe excluir forzosamente las contramedidas.

47. Con respecto a los artículos 51 a 53, relativos a las consecuencias de un crimen internacional, Australia expresa su profunda preocupación por la inclusión del concepto de crimen internacional en el proyecto de artículos. Además, si se eliminaran las excepciones con respecto a la obligación de reparación previstas en el artículo 43 y en el párrafo 3 del artículo 45, el artículo 52 también sería innecesario y habría que suprimirlo. En el apartado a) del artículo 53, por el que se obliga a un Estado a no reconocer la legalidad de la situación creada por el crimen, no se establece una distinción entre el reconocimiento explícito e implícito. Tanto el apartado a) como el b) plantean problemas por no hacerse en ellos referencia alguna a plazos.

48. Australia considera conveniente y factible que la Comisión concluya su labor sobre el tema durante el quinquenio y estima que por el momento no debe tomarse una decisión definitiva sobre la forma que habrá de darse al proyecto de artículos.

49. El Sr. **González Sánchez** (Venezuela) expresa su reconocimiento al Grupo de Trabajo de la Comisión que examinó el proyecto de artículos sobre inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes a la luz de la evolución reciente de la legislación y la práctica de los Estados. Sin embargo, la jurisprudencia examinada no refleja plenamente la jurisprudencia de los tribunales nacionales sobre la cuestión. La delegación de Venezuela estudió con detenimiento las recomendaciones del Grupo de Trabajo relativas a los conceptos de Estado, empresa estatal, contrato de trabajo y medidas coercitivas, y se referirá a ellos en la próxima reunión del Grupo de Trabajo de la Sexta Comisión sobre el tema. La elaboración de un proyecto de



convención verdaderamente efectivo y que resulte aceptable para todos los Estados constituirá un extraordinario aporte para el proceso de codificación y desarrollo del derecho internacional.

50. Con respecto al tema de la responsabilidad internacional, el orador señala que, si bien la Comisión debe intentar mejorar su labor en cuanto al proyecto de artículos, no debe alejarse demasiado de sus postulados. Toda modificación debe racionalizar y aclarar el texto sin reducir su contenido y su alcance.

51. La distinción entre las obligaciones de comportamiento y las obligaciones de resultado establecidas en los proyectos de artículos 20 y 21, lejos de ser un simple ejercicio académico, tienen consecuencias importantes con respecto a las normas secundarias que han de elaborarse para determinar la responsabilidad del Estado. Por lo tanto, aunque Venezuela puede aceptar modificaciones de redacción que permitan racionalizar las disposiciones, está plenamente de acuerdo en que se mantenga dicha distinción.

52. Venezuela expresa particular interés en las cuestiones planteadas en relación con el capítulo IV, relativo a la implicación de un Estado en el hecho internacionalmente ilícito de otro Estado. La inclusión del término “asistencia” en el artículo 27 es apropiada. La cuestión que se plantea no es la del comportamiento conjunto de dos o más Estados, que puede quedar reflejada adecuadamente en el capítulo II, sino más bien el problema concreto de la posible implicación de un Estado en el hecho ilícito de otro Estado, que debe examinarse por separado. En el artículo 28 propuesto, relativo a la responsabilidad de un Estado por ejercer coacción sobre otro Estado, debe aclararse que el término “coacción” no se limita al uso de la fuerza armada sino que puede tener una acepción más amplia y abarcar otro tipo de medidas, como la presión económica, de modo que el Estado coaccionado no tenga otra alternativa que cumplir los deseos del Estado que ejerce la coacción.

53. Con respecto al capítulo V, relativo a las circunstancias que excluyen la ilicitud, el orador subraya que el texto debería basarse en un criterio restrictivo que impidiera a los Estados utilizarlo como excusa para no cumplir sus obligaciones internacionales. Venezuela está de acuerdo con el Relator Especial en que existe una distinción válida entre el “caso fortuito” y la “fuerza mayor” y, por lo tanto, apoya su propuesta nueva redacción del artículo 31, en que se suprime la referencia

al primer concepto y se define mejor el segundo. La propuesta del Relator Especial de eliminar el elemento subjetivo implícito en la frase “o que se percatara de que su comportamiento no era conforme a esa obligación” también es acertada.

54. Con respecto al artículo 40 y a la definición de “Estado lesionado”, Venezuela considera apropiada la referencia al derecho lesionado por el hecho de un Estado, pero no considera necesaria la referencia al daño que produce tal lesión. La transgresión de un derecho no supone necesariamente un daño y, menos aún, que el daño sea inmediato. El hecho ilícito puede causar un daño potencial. Venezuela está de acuerdo en que la lista que figura en el párrafo 2 del artículo 40 del proyecto es meramente enunciativa, con lo que queda la posibilidad de que se consideren otras situaciones, por ejemplo, que un Estado puede resultar lesionado por el acto unilateral de otro Estado, tema que la Comisión estudia por separado.

55. Conviene mantener el párrafo 3 del artículo 40 del proyecto, relativo al Estado que resulta lesionado por un crimen internacional; además, deben incluirse normas específicas relacionadas con las consecuencias jurídicas de esos hechos. De manera análoga, si se decidiera mantener el artículo 19, uno de los artículos más polémicos, deberían mantenerse también los artículos 51 a 53. La distinción entre delitos y crímenes, o para utilizar un término más aceptable, delitos excepcionalmente graves, es importante en la medida en que se establezcan normas específicas sobre las consecuencias jurídicas que se derivan de tales actos.

56. Venezuela apoya plenamente el principio en que se basa el artículo 41, ya que la obligación de la cesación del hecho ilícito es sin duda una exigencia primordial. La referencia a la cesación del hecho ilícito puede formularse en una disposición expresa, como la que presentó la Comisión, o en el artículo sobre las consecuencias de un hecho internacionalmente ilícito, como lo sugirió Francia en los comentarios que presentó por escrito.

57. El Sr. Keinan (Israel) dice que uno de los aspectos más polémicos de la segunda parte del proyecto de artículos sobre responsabilidad de los Estados (A/54/10, cap. V) es el de la definición de Estado lesionado. En el artículo 40 se establece una serie de situaciones según las cuales los Estados pueden considerarse lesionados, pero el orador no está convencido de que la lista constituya una aportación valiosa; de

hecho, algunos de los ejemplos que se incluyen en ella en realidad plantean problemas.

58. Un ejemplo de ello es el apartado e) del párrafo 2, que se refiere a la situación de un Estado lesionado por la violación de un tratado multilateral. Esa disposición pareciera tratar de usurpar el papel de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, especialmente el artículo 60. La violación de las disposiciones de un tratado debe regirse, en primer lugar, por las disposiciones establecidas en el propio tratado. En su defecto, el marco jurídico apropiado será el derecho de los tratados, no las normas sobre responsabilidad de los Estados.

59. En relación con las violaciones del derecho internacional que afectan a los Estados partes en un tratado multilateral, a que se refieren los apartados e) y f) del párrafo 2 y el párrafo 3 del artículo 40, se plantea un problema fundamental. En esas disposiciones la confusión entre el concepto de Estado “lesionado” y Estado “interesado” podría dar lugar a situaciones absurdas, teniendo en cuenta especialmente las consecuencias prácticas de dicha violación. En la forma en que están redactados, los artículos disponen que cualquier Estado calificado como “lesionado” tiene el derecho de obtener reparación en forma de restitución, indemnización y satisfacción. Sin embargo, no existe ni en la práctica ni en el derecho internacional, fundamento alguno que permita a los Estados obtener reparación en los casos en que no hayan podido demostrar que han sido realmente lesionados. El concepto de obligaciones *erga omnes* es en realidad mucho más complicado de lo que se da a entender en el proyecto de artículos y no significa que todos los Estados resulten afectados del mismo modo por una violación. En el caso de los Estados interesados, a diferencia de los Estados lesionados, las consecuencias de una violación grave se limitarán al derecho de exigir la cesación del comportamiento ilícito y la reparación que ha de obtener el Estado lesionado. Evidentemente debe replantearse la forma de abordar este tema en el proyecto de artículos.

60. Con respecto a la reparación, el principio básico establecido en el artículo 42 es el de la reparación íntegra. Sin embargo, tanto en el artículo 42 como en los artículos subsiguientes se observa cierto menoscabo de ese principio. El párrafo 3 del artículo 42, en que se establece que “En ningún caso podrá la reparación tener por resultado privar a la población de un Estado de sus propios medios de subsistencia” es motivo de gran preocupación. Según una interpretación restrictiva,

ninguna de las formas de reparación mencionadas en el proyecto de artículos podría realmente justificar la confiscación de los medios de producción de un Estado; sin embargo, como lo han señalado varias delegaciones, la disposición prevé una escapatoria conveniente para el Estado que comete el hecho ilícito, que le permite abusar de ella y evitar la obligación de conceder la reparación, aunque disponga de los medios para hacerlo.

61. Con respecto a la indemnización, Israel mantiene que la inclusión de los intereses y del lucro cesante no debe ser facultativa sino obligatoria, de conformidad con el principio de la íntegra reparación. También está de acuerdo en que la exigencia de pagar una indemnización se estudie con más detenimiento. La formulación actual del artículo 44 es tan breve que resulta poco útil, especialmente si se compara con las disposiciones más detalladas de los artículos 45 (Satisfacción) y 46 (Seguridades y garantías de no repetición). Al ampliar las normas de ese artículo, convendría hacer referencia a las diversas formas de indemnización propuestas por el Relator Especial en 1989.

62. Podría decirse que el tema de las contramedidas es la parte más compleja de la responsabilidad de los Estados, pues refleja las imperfecciones del régimen jurídico internacional. Al examinar el tema, es preciso que en el proyecto de artículos se reconozca, por una parte, que en la práctica el riesgo de adoptar contramedidas podría ser el único elemento eficaz para disuadir la comisión de hechos ilícitos, pero, por la otra, no debería alentarse demasiado el recurso a ellas. En el proyecto de artículos se deberían incorporar, en la medida de lo posible, las complejas normas existentes en el derecho internacional consuetudinario relativas a las contramedidas, y no tratar de reformularlas o de mejorarlas. Por consiguiente, Israel no puede apoyar la disposición que figura en el artículo 48, según la cual el Estado lesionado debe negociar antes de adoptar contramedidas, obligación que, a diferencia de la exigencia de cesación o reparación, no tiene fundamento alguno en el derecho internacional consuetudinario. Además, Israel no considera práctica la disposición de prohibir la adopción de medidas ya sea antes o durante las negociaciones, y expresa su preocupación de que los Estados que cometen el hecho ilícito puedan abusar de esa disposición y utilizar el pretexto de las negociaciones como táctica para aplazar la adopción de contramedidas. La excepción prevista en el proyecto de artículos, a saber, la disposición del artículo 48 relativa a las

medidas transitorias de protección, no es suficientemente clara o inequívoca para resolver la dificultad.

63. Israel comparte la opinión de los Estados que se han opuesto a la situación desequilibrada de conceder únicamente al Estado que ha cometido el hecho internacionalmente ilícito y no al Estado lesionado, el derecho de someter la controversia a arbitraje. Ese criterio podría conducir inevitablemente a un aumento en la aplicación de contramedidas para incitar a los Estados que cometen hechos ilícitos a someter las controversias a arbitraje.

64. Por último, el orador desea contestar la pregunta de la Comisión relativa a las consecuencias específicas que el proyecto de artículos atribuye a los “crímenes internacionales”. La delegación de Israel expresó anteriormente sus reservas con respecto a la utilidad del concepto de crímenes internacionales, reservas que se han consolidado aún más a la luz de las consecuencias específicas propuestas para establecer la distinción. La disposición del artículo 52, que permite al Estado lesionado por un hecho ilícito que constituye un crimen obtener reparación, aun cuando ello entrañe para el Estado que ha cometido el hecho una carga totalmente desproporcionada en relación con la ventaja que derivaría el Estado lesionado de la indemnización o comprometa gravemente la independencia política o la estabilidad económica del Estado que haya cometido el hecho internacionalmente ilícito, no tiene fundamento alguno en el derecho internacional. Si bien las consecuencias que afectan a todos los Estados, según lo dispuesto en el artículo 53, plantean menos problemas, preocupa al orador el hecho de que, según la redacción del apartado d), el Estado tenga la obligación de cooperar con otros Estados en la aplicación de medidas destinadas a eliminar las consecuencias del crimen, aunque el Estado considere que la medida es desacertada o que probablemente no sea eficaz.

65. La **Sra. Todorova** (Bulgaria) dice que Bulgaria puede aceptar la simplificación del capítulo III del proyecto de artículos sobre responsabilidad de los Estados propuesta por el Relator Especial, siempre que ello no debilite el contenido jurídico previsto y el efecto regulador del documento. En la declaración que formuló ante la Sexta Comisión durante el período de sesiones anterior, Bulgaria presentó su opinión sobre el contenido del antiguo artículo 19 del proyecto, suprimido de la versión actual del proyecto de artículos. La oradora entiende las razones por las que se suprimió el artículo, sin embargo, desea subrayar que la distinción entre los

conceptos de delito internacional y crimen internacional es fundamental. Por ello, espera que en su futura labor sobre el proyecto de artículos la Comisión tenga en cuenta esa distinción, especialmente con respecto al régimen de las consecuencias de la responsabilidad. Además, debe tener en cuenta la evolución actual del derecho internacional, especialmente la aprobación y la próxima entrada en vigor del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

66. La oradora acoge con satisfacción la decisión del Relator Especial de mantener el artículo 26 bis, relativo al agotamiento de los recursos internos. Bulgaria toma nota con interés de las sugerencias presentadas por el Relator Especial con respecto a la reformulación del capítulo IV (Implicación de un Estado en el hecho internacionalmente ilícito de otro) y la reorganización del capítulo V (Circunstancias que excluyen la ilicitud). El proyecto de artículos constituye una base útil para el debate, pero el fondo del texto debe analizarse con detenimiento, teniendo en cuenta las dinámicas relaciones internacionales contemporáneas. Si se examinara más cuidadosamente la evolución y el carácter de las relaciones entre los temas actuales del derecho internacional, resultaría inadecuado el argumento de la Comisión, de que el artículo 29 ter (Legítima defensa) debe vincularse únicamente con el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

67. Bulgaria no tiene ninguna objeción con respecto a las recomendaciones que se formulan en el párrafo 29 del informe de la Comisión, especialmente en el apartado a). Además, en el artículo 40 debería definirse con mayor claridad la violación del derecho de un Estado lesionado.

68. El derecho internacional contemporáneo proporciona fundamentos suficientes para llegar a la conclusión de que los intereses son parte inherente de la indemnización. Por lo tanto, ese principio debe explicarse con más claridad en el artículo 44. Con respecto al párrafo 2 del artículo 58, Bulgaria está de acuerdo con la Comisión en que la adopción de contramedidas no debe vincularse al derecho de tomar la iniciativa para someter la controversia a arbitraje. Por último, Bulgaria apoya la sugerencia de la Comisión de que en el proyecto de artículos se examine la situación que se plantea cuando varios Estados participan en la infracción de una obligación internacional o resultan lesionados por un hecho internacionalmente ilícito.

69. Con respecto a la nacionalidad de las personas naturales en relación con la sucesión de Estados, la oradora no tiene objeción alguna a la decisión de la Comisión de recomendar a la Asamblea General que el proyecto de artículos se apruebe en forma de declaración, teniendo en cuenta la complejidad y la duración de los procedimientos relacionados con la elaboración, la aprobación y la entrada en vigor de un tratado internacional de carácter universal.

70. El **Sr. Rogachev** (Federación de Rusia) dice que la debatida cuestión de las normas primarias y secundarias, su licitud y su pertinencia para el proyecto de artículos sobre responsabilidad de los Estados no debe tener una influencia decisiva en el examen del texto; la Comisión debería guiarse más bien por consideraciones prácticas. De hecho, existen varios argumentos en contra de que se incluyan únicamente normas secundarias en el proyecto de artículos sobre responsabilidad de los Estados. Además, actualmente se elaboran cada vez más normas internacionales de procedimiento, de modo que la división entre normas “primarias” y normas “secundarias” está perdiendo importancia práctica.

71. La Federación de Rusia destaca la importancia de velar por que en el proyecto de artículos queden debidamente reflejadas las nuevas relaciones jurídicas en la materia. La falta de elementos individuales de esa compleja cuestión, independientemente del motivo de su exclusión, puede socavar considerablemente el valor del proyecto en su conjunto. El orador espera que las deliberaciones sobre el denominado carácter primario de las normas no sea uno de esos motivos.

72. La Federación de Rusia toma nota con interés de la propuesta del Relator Especial de reformular el artículo 16 del proyecto. Sin embargo, la redacción propuesta no es totalmente satisfactoria, ya que abarca por lo menos dos cuestiones examinadas anteriormente en relación con el artículo 16 (Existencia de una violación de una obligación internacional), el párrafo 2 del artículo 17 (No pertinencia del origen de la obligación internacional violada) y el párrafo 1 del artículo 19. En la nueva redacción se combinan varias disposiciones tan importantes que merecen ser examinadas por separado; además, implica cambios en la numeración, lo que convendría evitar. El párrafo 2 del artículo 17 podría haberse conservado con la aclaración pertinente.

73. La Federación de Rusia no está de acuerdo con las posibles interpretaciones que hace el Relator Especial de ese párrafo y que figuran en el párrafo 92 del

informe. El objeto del párrafo era más bien enunciar uno de los principios fundamentales de la responsabilidad de los Estados, a saber, que la fuente de la obligación internacional es indiferente respecto de la responsabilidad que entraña. Por lo tanto, el orador propone que el párrafo se redacte de la manera siguiente: “El hecho internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a responsabilidad jurídica internacional cualquiera que sea la fuente de la obligación internacional violada por ese Estado”. La propuesta se basa, entre otras cosas, en las opiniones expresadas durante el 51º período de sesiones de la Comisión, como se señala en el párrafo 103 del informe.

74. La Federación de Rusia apoya la propuesta del Relator Especial de incluir en el proyecto un artículo que enuncie el principio de que la responsabilidad de un Estado, una vez nacida, no desaparece simplemente porque la obligación subyacente haya terminado (A/54/10, párr. 121). El orador considera que ya se han obtenido resultados satisfactorios con respecto a los artículos 24 y 25 del proyecto.

75. El capítulo IV del proyecto de artículos (Implicación de un Estado en el hecho internacionalmente ilícito de otro Estado) es de fundamental importancia. La Federación de Rusia no está de acuerdo con la opinión de que los artículos de ese capítulo raras veces pueden aplicarse en la práctica; de hecho, su opinión al respecto es totalmente opuesta. Desde ese punto de vista, parece ser puramente teórica la importancia de determinar cuál ordenamiento jurídico nacional ha ejercido mayor influencia en la formulación de las disposiciones de ese capítulo, que se menciona en el párrafo 244 del informe de la Comisión.

76. La cuestión de la responsabilidad de los Estados que actúan conjuntamente es particularmente importante. Sin embargo, el hecho de determinar si los Estados actúan colectivamente por medio de una organización internacional o si actúan colectivamente pero no por medio de personas jurídicas separadas no es esencial; los Estados no deben tener la posibilidad de eludir su responsabilidad por la comisión de hechos ilícitos aunque hayan actuado en el marco de organizaciones internacionales. La Federación de Rusia apoya la opinión, señalada en el párrafo 260 del informe, de que la situación de que trata el proyecto de artículos es de tanta actualidad que la Comisión no puede aplazar la decisión hasta que haya examinado los artículos sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales. En ese contexto, resulta superfluo el requisito de

que un hecho internacionalmente ilícito debe ser internacionalmente ilícito no sólo para el Estado que lo comete sino también para el Estado “que presta la asistencia”.

77. El orador está de acuerdo con el artículo 29 bis del proyecto, propuesto por el Relator Especial, y considera que el capítulo V del proyecto de artículos no estaría completo sin él. Al respecto, se refiere no sólo a los casos que requieren una simple aplicación de la doctrina del *jus cogens*, sino también a situaciones generales que surgen de la práctica de los Estados basada en el Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas y que suponen no sólo el uso de la fuerza sino también el cumplimiento de sanciones económicas impuestas por el Consejo de Seguridad.

78. La Federación de Rusia está de acuerdo en que en la segunda parte del proyecto de artículos se incluyan disposiciones detalladas sobre las contramedidas a fin de velar por una estricta reglamentación de su utilización. Sin embargo, expresará su posición al respecto una vez que la Comisión haya redactado disposiciones suficientemente detalladas.

*Se levanta la sesión a las 12.20 horas.*